

C.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veinticinco.

PRIMERO. Comparece Liliana Galdámez Zelada, abogada, Directora Jurídica y mandataria judicial de la Universidad de Chile, interponiendo reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, en adelante también CLPT, por haber incurrido en infracciones a la Ley N° 20.285, de acceso a la información pública o también, Ley de Transparencia, con ocasión de la Decisión de Amparo Rol C10439-23, dictada en la sesión N° 1.447, celebrada el 11 de junio de 2024, que acogió el deducido por don Pedro Aliaga Salazar, en representación de doña Paula Alejandra Castillo Gutiérrez, por denegación de acceso a la información y ordenó a la Universidad hacer entrega de la información requerida, actuación que considera ilegal, atendido a que infringe las normas sobre causales de reserva o secreto establecidas en el artículo 21 N°1 y 2 de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, por lo que solicita que se declare (i) que se rechaza el reclamo C10439-23; (ii) que la decisión del Consejo para la Transparencia resulta ilegal; (iii) que la Universidad de Chile no ha incumplido las obligaciones de Transparencia Activa contenidas en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; y, (vi) que no es información pública la copia de todo el soporte documental referente a un acto unilateral de un funcionario público, como la renuncia, como los correos electrónicos, sostenidos entre este y las Unidades que hubiesen participado en la formalización de dicha decisión.

Anticipa que la Decisión recurrida comete una serie de infracciones legales pues excede las atribuciones del CPLT, quien constituyéndose como un verdadero legislador delimita el alcance de normas legales que no tienen relación directa con su quehacer y el acceso a la información pública, fijando obligaciones legales adicionales para esta Institución de Educación Superior Estatal, vulnerando el marco normativo de la Universidad de Chile y, por consiguiente, su autonomía.

Expone que con fecha 20 de julio de 2023, don Pedro Aliaga Salazar, en representación de doña Paula Alejandra Castillo Gutiérrez, solicitó a la Universidad de Chile información respecto del funcionario señor Andreé Henríquez Aravena, que en lo medular, es la siguiente:

1.- Copia de todos los contratos y/o decretos de nombramiento por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SLHNXYJXXDD

período comprendido entre los años 2014 a la actualidad.

2. Copia del acta del concurso y gestión documental del proceso de selección al cargo desempeñado (o en desempeño), así como el acto en que conste el cese de funciones en cargos, dentro de proyectos de ejecución con financiamiento estatal.

3. Copia de la carta de renuncia, de los decretos en que conste su cese de funciones y de todo el soporte documental referente a dicho cese, incluyendo correos electrónicos sostenidos con la Unidad de Personal, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Rectoría y Dirección Jurídica.

4.- Situación contractual, horas asignadas y remuneración percibida por todo el período de desempeño, como subdirector del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Núcleo de Investigación Transdisciplinaria para la Educación Superior (NITES).

Explica que través del Oficio UT(O) N° 419/23, del 1 de septiembre de 2023, se responde la solicitud de información, haciendo presente que se accede únicamente a la información disponible en el link <https://uchile.cl/presentacion/informacion-publica/dotacion-de-personal/>; que la información sobre el personal universitario se encuentra permanentemente publicada en el sitio web antes indicado; que en el referido sitio web se puede encontrar información sobre las personas que han prestado servicios a la Universidad desde 2011 al presente, desglosada por tipo de vínculo (planta, contrata o convenio a honorarios), mes y año, incluyendo información sobre la unidad, grado, estamento y remuneración, entre otros elementos; y que se deniega la información respecto del resto de lo requerido, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Las comunicaciones privadas no constituyen información pública: Los correos electrónicos, cartas y otras comunicaciones NO constituyen información pública y su privacidad se encuentra garantizada constitucionalmente. Además no son actos o resoluciones de órganos del Estado, cuya publicidad se exigida constitucionalmente; ii) Que la entrega de la información requerida comprende antecedentes que son parte de procedimientos en curso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley N° 20.285. iii) Que la solicitud implica emitir pronunciamientos jurídicos que exceden el ámbito y/o no cumple los requisitos de la Ley N°



20.285, y; iv) la oposición del tercero afectado.

Informa que al contestar el traslado del amparo, reitera las razones antes señaladas para denegar la información y contesta las preguntas del CPLT, en cuanto que el artículo 21, numeral 1, letra b), de la Ley N°20.285, en relación con el artículo 7°, número 1, literal b), de su Reglamento, establece como causal de secreto o reserva de la información “b) *Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución*” y, en este caso, se encontraba en tramitación una denuncia de la Sra. Paula Castillo Gutiérrez, respecto del Sr. Andreé Henríquez Aravena, procedimiento en que la resolución del recurso jerárquico se encontraba pendiente a la fecha de la respuesta remitida a la requirente, esto es, al 1 de septiembre de 2023, por lo que la Casa de Estudios Superiores denegó acceso a la información requerida, al estimar que no resulta procedente otorgar acceso a documentos que podrían servir de fundamento para la adopción de una resolución o medida por parte de las autoridades universitarias competentes, es decir, los antecedentes podían servir de fundamento para decidir acoger el recurso jerárquico ya señalado y, en consecuencia, ordenar instruir un procedimiento disciplinario respecto de don Andreé Henríquez Aravena.

Apunta que en relación a la consulta del CPLT relativa a *¿cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero?*”, se hace presente la oposición del Sr. Henríquez a la entrega de la información, dando cuenta además que la entrega de las comunicaciones solicitadas por la requirente afectaría los derechos de las personas en lo relativo a la esfera de su vida privada, toda vez que dichas comunicaciones no constituyen por sí actos administrativos, sino que corresponden a un canal de comunicación interna, similar a una llamada telefónica o mensaje entre funcionarios, cuyo contenido podría o no plasmarse en un acto administrativo final; se adjuntan todos los documentos relacionados con el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo los datos de contacto del tercero que se opuso y se aclara, sobre la existencia de correos electrónicos, que en la Unidad de Personal, no hay intercambios; en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, solo hay respaldo del correo de renuncia enviado por Henríquez; en Rectoría, no hay mensajes relacionados y que en Dirección Jurídica: No hay intercambios; que conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al Sr. Henríquez se le informó de su derecho de



oposición, el cual ejerció dentro del plazo legal; y se hace presente que la solicitud implica emitir pronunciamientos jurídicos en cuanto al detalle de "funciones específicas" solicitado, lo cual excede el ámbito de la Ley de Transparencia, pues sólo se pueden entregar documentos existentes, no crear nuevos análisis.

Luego, previo a exponer las ilegalidades en que en su parecer incurre el CPLT, desarrolla latamente el régimen constitucional, legal y administrativo de la Universidad de Chile, con particular énfasis en su autonomía, la que, fundada en las normas que cita, constituye un verdadero derecho que le asiste a los establecimientos de educación superior para regirse a sí mismos de conformidad a lo señalado en sus estatutos y con estricto apego al cumplimiento de sus finalidades, concluyendo que la institución se muestra como un órgano que excede la definición clásica del artículo 28° de la Ley N°18.575, pues ella ofrece, a través de su compleja y heterogénea estructura interna, los más diversos servicios a la comunidad, tanto a órganos del Estado como a privados, situación que no es la habitual en otros entes públicos.

Seguidamente, desarrolla las a su juicio, las infracciones de ilegalidad presuntamente cometidas por el CPLT en la dictación de la Decisión C10439-23, siendo la primera de ellas que el contenido de los Correos Electrónicos, es información personal, que se encuentra resguardada tanto legal como constitucionalmente, pues los correos electrónicos corresponden a comunicaciones privadas, las que no constituyen información pública.

Agrega que los correos electrónicos corresponden a interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que aquellos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. Que se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o, de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social. Y en ese sentido, afirma que las comunicaciones privadas se encuentran amparadas



constitucionalmente en los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política.

Advierte que lo anterior se encuentra respaldado en la jurisprudencia del CPLT y de los tribunales superiores, quienes han declarado de forma uniforme y reiterada que la privacidad de comunicaciones, como los correos electrónicos, se encuentra resguardada constitucionalmente y que la Ley de Transparencia no tiene la especificidad necesaria para afectar tales garantías, y al efecto, cita numerosa jurisprudencia del mismo CLPT, del Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la Republica y la Dirección del Trabajo

Denuncia que es el propio CPLT quien ha considerado el carácter privado de las comunicaciones a través de correo electrónico y, desatendiendo su propia normativa, sorprende al exigir a esta Casa de Estudios contravenir la ley a través de su decisión.

Sintetiza, que en suma, las comunicaciones privadas no constituyen información pública conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y los artículos 8° y 19 N° 4 y 5 de la Constitución y en razón de ello, no es posible otorgar acceso a las comunicaciones requeridas por la solicitante.

En un segundo orden de ideas, asevera que la Universidad de Chile entregó la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 20.285, según el cual *“[c]uando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar”*.

En tercer lugar, sostiene que la decisión de amparo afecta la autonomía de la Universidad de Chile y excede las competencias del CPLT, pues invocando el artículo 21, numeral 1, letra b), de la Ley N°20.285, reitera que considerando que la resolución del recurso jerárquico se encontraba pendiente a la fecha de la respuesta remitida a la requirente, esto es, al 1 de septiembre de 2023, esta Casa de Estudios Superiores denegó acceso a la



información requerida, pues dicho recurso administrativo se refiere a una denuncia presentada por un funcionario de la Universidad en contra del Sr. Andreé Henríquez Aravena, mientras este ejercía funciones en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de esta Institución.

Finalmente, expresa que la decisión impugnada supone una vulneración de la autonomía universitaria, del marco normativo aplicable a la Universidad de Chile y una actuación fuera de las competencias asignadas al CPLT.

SEGUNDO. Que, evacuando el informe solicitado, el Consejo para la Transparencia pide el rechazo del reclamo por las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Explica que en la tramitación del amparo, además del traslado evacuado por la Universidad de Chile que describe, el CPLT acordó dar traslado también al tercero interesado, mediante Oficio E27052, de 11 de diciembre de 2023, sin que éste haya formulado descargos u observaciones que ponderar en sede administrativa, y luego de analizarse todos los antecedentes, el Consejo para la Transparencia, mediante Decisión de Amparo Rol C10439-23, adoptada con fecha 11 de junio de 2024, acogió el amparo por denegación de acceso a la información deducido en contra de la Universidad de Chile.

Sintetiza que las objeciones de la Universidad de Chile en este reclamo de ilegalidad serían, en primer lugar, que el contenido de los correos electrónicos es información personal que se encuentra resguardada tanto legal como constitucionalmente, señalando que es una comunicación privada que no constituye información pública; que la universidad habría entregado la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 20.285, y que se alega que la decisión impugnada afecta supuestamente la autonomía de la universidad y excedería las competencias del Consejo para la Transparencia, alegando como infringido el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, por las razones que indica.

Plantea, respecto de la primera objeción, que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el art. 8°, inciso 2°, de la Constitución y los arts. 5°, art. 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar en poder del órgano en el ejercicio de sus funciones públicas, y que



mediante la interposición del presente reclamo de ilegalidad, la Universidad de Chile pretende restringir injustificadamente la aplicación y alcance de esas normas y que se aplique extensivamente las causales de reserva que indica, olvidando que a partir del año 2005 el ordenamiento jurídico incorpora el principio de publicidad

Hace presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública; que el artículo 3° letra e), del Reglamento de la Ley de Transparencia, define el término “documento”; cita al efecto los artículos 5° y 10 inciso segundo de la misma Ley, que define los que debe entenderse como información pública; invoca la “*presunción de publicidad*” y el Principio de Relevancia, contemplados en el Art. 11, letra c), y a), respectivamente de la Ley de Transparencia, todo lo cual dice, reafirma la publicidad de la información que el Consejo ha ordenado entregar al solicitante, dado que la reclamante de ilegalidad no logró acreditar cómo se produciría la afectación a los bienes jurídicos alegados, lo que determinó el rechazo de la causal de reserva invocada durante la tramitación del amparo.

Concluye en este aspecto, que la información objeto del amparo detenta una naturaleza eminentemente pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por constituir una excepción al principio general de publicidad, deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y desde luego, ser acreditada fehacientemente por quien las invoca, lo cual no ocurrió en el caso de autos.

En segundo término, aduce que la Universidad de Chile carece de legitimación activa para invocar la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, bajo el argumento que la revelación de la información afectaría el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de quienes fueron parte del procedimiento de amparo en calidad de terceros interesados, no pudiendo alzarse como agente oficioso de aquellos.

Reitera que el Consejo, notificó a don Andreé Henríquez Aravena tanto del amparo como de la decisión de amparo, sin que este evacuara descargos o dedujera reclamo de ilegalidad ante esta Iltma. Corte; lo que importa que renunció a invocar la causal de secreto del Art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y cualquier otra alegación que vaya en la línea de la afectación



de sus derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de su vida privada, dando cuenta con ello, que no es efectivo que el contenido de las comunicaciones electrónicas enviadas por el tercero interesado, diga relación con esos derechos, pues si contuvieran información sensible y privada, relativa a aspectos personales o íntimos, ajenos al desempeño de la función pública que desempeñó, sin duda hubiera desplegado todos sus esfuerzos para reservar esa información, lo que no hizo, al decidir no reclamar de ilegalidad, allanándose con lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, lo que corrobora que el contenido de las comunicaciones no se refiere a espacios de su vida privada, y que por lo tanto, su entrega tampoco infringe el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Señala que la legitimación activa para reclamar de ilegalidad ha sido conferida por expresa disposición del inciso 3° del artículo 28 de la Ley de Transparencia a los terceros posibles afectados con la entrega de la información requerida, en este caso a don Andreé Henríquez Aravena y de este modo, se ha relevado de la misma al órgano, entidad que carece de la posibilidad de ejercer la presente reclamación, de manera que el órgano no se encuentra facultada para reclamar de ilegalidad; y que no tiene sentido que el legislador hubiere regulado expresamente el derecho de oposición, tanto ante el órgano requerido, como ante el Consejo para la Transparencia, y el derecho a reclamar de ilegalidad para los terceros, si los órganos de la Administración igualmente pudieran hacerlo oficiosamente, pues en tal caso, se tornaría inútil y carente de todo efecto práctico la regulación legal contenida en los artículos 20, 25, y el inciso 3° del Artículo 28 de la Ley de Transparencia.

Sostiene que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la vida privada, que el órgano estima afectados es de titularidad del funcionario titular de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos, lo que se encuentra en concordancia con la jurisprudencia judicial de esta Iltma. Corte, y de la Excma. Corte Suprema en los fallos que cita, que ratifican que los órganos de la Administración no pueden actuar como agente oficio de los terceros.

Agrega que el vocablo “*afectado*” utilizado por el inciso 3° del Art. 28 de



la Ley de Transparencia, debe ser interpretado en el sentido natural y obvio, esto es, como referido a los terceros que se estimen afectados con la publicidad de la información ordenada revelar, siendo éstos los únicos titulares de los derechos protegidos por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, motivo por el cual el órgano requerido no puede atribuirse una representación que no detenta, tornando carente de efecto práctico el mecanismo de comunicación obligatorio de la solicitud a los terceros eventualmente afectados, pues actúa como agente oficioso de éstos.

Agrega que si el tercero interesado optó voluntariamente por no reclamar de ilegalidad, ello se traduce en que ha renunciado válida y legítimamente a invocarla, por no estar prohibida la renuncia conforme lo señalado en el Art. 12 del Código Civil, lo que corrobora a juicio de esta Corporación, que con mayor razón la recurrente no puede insistir en que los correos electrónicos institucionales de un funcionario público respecto de un determinado periodo, sean reservados en virtud de lo dispuesto en el Art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia

En tercer lugar, sostiene que la publicidad de los correos electrónicos ordenados entregar, no afecta los derechos a la vida privada, ni la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, consagrados en el art. 19 N°s 4 y 5 de la Carta Fundamental y al respecto, hace presente que la decisión de amparo reclamada solo dispone la entrega de los correos electrónicos institucionales, enviados dentro del ejercicio de las funciones públicas de determinado funcionario, que son documentos generados en formato electrónico; dicen relación con el ejercicio de funciones públicas que desempeñaron sus emisores; se encuentran en poder del órgano público requerido; han sido elaborados con presupuesto público, en el marco del ejercicio de funciones que tiene el mismo carácter; y, no dicen relación con la vida privada de sus emisores, por lo que no es posible sostener que la revelación de los correos en controversia atente contra *la vida privada ni la inviolabilidad de las comunicaciones privadas* de los emisores de dichas comunicaciones electrónicas, por cuanto se trata de correos que fueron enviados en el ejercicio de sus funciones públicas.

Respecto de la objeción constitucional invocada por la Universidad, sostiene que del tenor literal de lo dispuesto en el Art. 19 N° 5 de la



Constitución, resulta incuestionable que en dicho precepto constitucional se garantiza la “inviolabilidad de las comunicaciones privadas” de las personas, entre ellos también los mensajes o correos electrónicos de la cuenta de correo laboral o institucional de una empresa privada, siempre que se refieran a aspectos propios de la vida privada e intimidad de su emisor. Por ende, no resulta aceptable que se pretenda sostener que lo importante es el continente y no el contenido, esto es, que por tratarse de casillas de correo electrónico de funcionarios públicos, automáticamente la información que fluye por dicho medio sea totalmente reservada, sin distinguir el contenido del mensaje, ya que aquello importaría crear un “canal de opacidad” al cual no podría accederse, aun cuando la información distribuida por dicho medio se refiera a aspectos propios del ejercicio de un cargo o función pública, máxime cuando el derecho al respeto a la vida privada y a la protección de las comunicaciones de la misma naturaleza, no tiene, como es evidente, carácter absoluto como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal en su sentencia dictada en los autos Roles Nos. 1732 y 1800, de fecha 21 de junio de 2011,

Razona que el análisis de afectación debe hacerse en concreto y caso a caso, sin que puede sostenerse en abstracto que los correos electrónicos institucionales de funcionarios públicos son per se, siempre y bajo todo respecto comunicaciones privadas, o si se estima que son públicos, siempre y en todo momento, su publicidad vaya a afectar la vida privada, la intimidad, la inviolabilidad de las comunicaciones de los funcionarios públicos titulares de las cuentas institucionales, ya que ello equivale a sostener que el contenido de una información eminentemente pública, o el fundamento de un acto administrativo o el procedimiento seguido para su dictación, pueda ser siempre secreto por haber sido enviado en un correo electrónico, lo que contraría el texto expreso del inciso 2° del Art. 8° de la Constitución Política.

Alega que aceptar lisa y llanamente los argumentos expuestos por el reclamante, importaría, desatender el test de daños que exige el Art. 8° inciso 2° de la Carta Fundamental, el cual arrojó en el caso concreto, que, en la especie, no se logró acreditar una afectación, como se expuso en el considerando 13), de la decisión impugnada, que cita

En cuarto lugar, argumenta que con el acceso a los correos electrónicos institucionales en comento no se afectan los derechos del tercero



interesado, pues se ordenó hacer su entrega previa aplicación del principio de divisibilidad, debiendo tarjarse todo dato personal; en este sentido, el Consejo acogió parte de las alegaciones efectuadas en procedimiento de amparo, resolviendo conferir acceso parcial a los correos institucionales solicitados, reservando determinados antecedentes como los datos personales y sensibles del tercero interesado.

Añade que la aplicación del Principio de Divisibilidad permite una convivencia razonable de la publicidad de los correos electrónicos solicitados con el debido resguardo de la información respectiva, pues se tutela, por un lado, el derecho fundamental de acceso a información pública, y por el otro, se protege asimismo la información sensible contenida, existiendo en consecuencia, un debido equilibrio entre ambos valores. De esta manera, no se advierte de ninguna manera, cómo la entrega de la información objeto de reclamo, pueda afectar los derechos de terceros si este Consejo, expresamente decretó eliminar dichos antecedentes, para precisamente, tutelar sus derechos.

Considera por otra parte, que no corresponde que la Universidad tenga por respondida la solicitud de acceso a la información, en los términos establecidos en el art. 15 de la Ley de Transparencia, cuando no señaló suficientemente la forma de acceder a ella y qué información en particular, ni los respectivos documentos, según lo razonado en el considerando 5) de la decisión impugnada: *“...a juicio de este Consejo, no permite considerar como configurada la hipótesis especial de entrega del artículo 15 de la Ley de Transparencia, por cuanto, no se ha señalado con la debida precisión la fuente, el lugar y la forma, específicos, en la que puede accederse a alguno de los antecedentes requeridos en la solicitud, la cual, está compuesta por diversa información de distinta naturaleza, sin explicar ni indicar expresamente como se vincula cada uno de ellos con el link informado. A su vez, debe considerarse que el solicitante también ha requerido los soportes documentales en los que obre parte de la información, a los cuales no sería posible acceder en el repositorio de internet informado. Así, en vista de la generalidad de la respuesta en este punto, y del hecho de no constar que obre en el vínculo web indicado la totalidad de la información requerida, se desestima la configuración de la hipótesis especial de entrega que consagra el artículo*



15 de la Ley de Transparencia”.

Así las cosas, la respuesta dada por la universidad al requirente de la información no facilita el acceso a lo específicamente solicitado, ni permite tener por respondida la solicitud en los términos consultados, por cuanto, a través de los links citados no proporciona aquello que fue requerido.

Acusa que la Universidad carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad sobre la base de la causal de reserva consagrada en el art. 21 n° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, por expresa prohibición del inciso 2° del art. 28 de la misma Ley: *“Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21”*, citando profusa jurisprudencia al efecto, por lo que estima que se debería desestimar conocer toda argumentación referida ya sea directa o indirectamente a la causal de reserva establecida en el Art. 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia y cualquier alegación formulada en la línea de la afectación de funciones de la universidad, por carecer de legitimación activa el órgano reclamante, para invocar tal causal como fundamento de su reclamo de ilegalidad.

Apunta que sin perjuicio de lo anterior, la reclamante de ilegalidad sostiene que el Consejo habría incurrido en ilegalidad al desechar la causal de reserva antes señalada, indicando que aquello implicaría supuestamente afectar su autonomía excediendo este Consejo supuestamente sus propias competencias.

Sobre el particular, hace presente que a partir de las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: i) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Y ii) que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en DESMEDRO del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Afirma que estos requisitos no fueron cumplidos por parte de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SLHNXYJXXDD

universidad, pues la Universidad en respuesta dada a la solicitante ni siquiera explicó en qué consistía la deliberación que estaba llevando a cabo, ni el tipo de procedimiento específico, ni qué información concreta de la solicitada formaba supuestamente parte del expediente respectivo, entre otros y sólo recién con ocasión de los descargos presentados ante este Consejo, vino a señalar qué era lo que se debía resolver por parte de la entidad pública. Y en cuanto al segundo requisito, la universidad no acreditó de manera alguna en el procedimiento administrativo cómo la entrega de la información pedida podría afectar de manera concreta y efectiva el debido cumplimiento de sus funciones.

Agrega que el reclamante invoca el artículo 10 de un protocolo interno, que establece la confidencialidad de la información en los procedimientos que se indica, alegación que se debe desestimar toda vez que dicha norma no tiene la jerarquía de ley de quorum calificado, atendido que el artículo 8° inciso 2°, de la Carta Fundamental dispone que: *“sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”* y como se puede apreciar, no se cumple en la especie con el presupuesto regulado en la norma constitucional.

Finalmente, solicita el rechazo del reclamo en su totalidad, por no concurrir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C10439-23, del Consejo para la Transparencia.

TERCERO: Que, para resolver, se debe tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República establece el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, estableciendo que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Así, la Ley N° 20,285, Ley de Transparencia, en su artículo 4° señala que *“el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y*



cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley". A su turno, en su artículo 5°, instituye que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

El mismo cuerpo normativo, consigna en su artículo 21, en lo que interesa, que: *"Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

[...]

A su vez, el inciso segundo del artículo 28 de la ley de Transparencia refiere: *"Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21".*

CUARTO. Que de las disposiciones antecitadas resulta fuera de toda duda que la Ley N° 20.085 prohíbe a los órganos sujetos a su imperio, como lo es la reclamante Universidad de Chile, ejercer el derecho a reclamo de ilegalidad cuando el Consejo haya otorgado, como es el caso, el acceso a la



información que el organismo público respectivo hubiere denegado basándose en la hipótesis transcrita, por lo cual resulta evidente que el reclamo intentado por la Universidad de Chile, en este extremo, no puede prosperar.

QUINTO. Que en cuanto la demás alegaciones de la reclamante, aun cuando no haya sido alegado formalmente de ese modo, aparece que por su naturaleza se reconducirían a la causal de reserva del número 2 del artículo 21, de la Ley de Transparencia, esto es, *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.”*; y al respecto, resulta asentado que en el marco del requerimiento de información efectuado a la Universidad de Chile, ésta cumplió su obligación legal de comunicar al tercero interesado -en este caso, el funcionario de la misma universidad del cual se solicitan sus antecedentes laborales en la misma casa de estudios-, la facultad que le asistía para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, derecho que éste ejerció oportunamente. De esta manera y conforme el inciso tercero del artículo 20 de la Ley N° 20.285, la Universidad quedó impedida de proporcionar los documentos o antecedentes solicitados mientras no hubiera una resolución en contrario del Consejo para la Transparencia, por lo que la denegación de información motivada en la oposición del tercero, en ese estadio del procedimiento administrativo de acceso a la información, fue adoptada por la Universidad de Chile conforme a la legalidad.

SEXTO. Que, sin perjuicio de lo anterior, deducido el respectivo amparo de información ante el CPLT por parte del requirente, resulta éste la autoridad competente para calificar si la oposición del tercero es justificada, esto es, si efectivamente, su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos del tercero oponente.

Y así, aparece que el Consejo para la Transparencia realizó dicha ponderación, en el acto reclamado, teniendo en consideración que lo pedido dice relación con el envío de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública; que el tercero interesado no explica debidamente la manera en la que se afectarían derechos específicos; que la aplicación estricta del



principio de divisibilidad resguarda los derechos de las personas; y que el tercero interesado no formuló descargos u observaciones en esa sede; concluyendo así que no se han aportado elementos de convicción suficientes para ordenar la reserva o secreto del correo electrónico (considerando 11°); y que por otra parte, el CPLT ha sostenido reiteradamente que los servidores públicos están sujetos a un nivel de escrutinio que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño, por lo cual ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vitae, títulos de profesión, liquidaciones de remuneraciones y otros antecedentes referidos al desempeño y/o comisión de sus laborales. (considerando 12°).

SÉPTIMO. Que, como advierte especialmente el CPLT en su decisión, si bien el tercero se opuso a la entrega de información una vez requerido por la Universidad, lo hizo *“sin explicar debidamente el tercero interesado la manera en la que se afectarían derechos específicos, ..., recordándose, además, que el tercero interesado no formuló descargos u observaciones en esta sede...”* (destacado en el original), inactividad de la cual puede concluirse que la decisión no lesiona sus derechos y en consecuencia, no causa agravio a la persona directamente concernida con la publicidad de la información requerida.

OCTAVO. Que así las cosas, aparece que en ejercicio de la facultad privativa para calificar la causal de reserva en caso de oposición de terceros, el CPLT ha motivado adecuadamente su decisión, la cual resulta entonces adecuadamente fundada, en los hechos y el derecho, conforme exige el artículo 41 de la Ley N° 19.880, por lo cual no existe reproche de ilegalidad alguno que pueda configurarse.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 20, 21, 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza**, sin costas, la reclamación deducida por la Universidad de Chile en contra del Consejo para la Transparencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SLHNXYJXXDD

No firma la ministra (S) Lidia Poza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su suplencia.

Contencioso Administrativo N°450-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SLHNXYJXXDD

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Fernando Ignacio Carreño O. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, veintitres de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintitres de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

